

las copias respectivas para el Semanario Judicial y remítanse estos autos á la Suprema Corte para su revision. Así sentencié y firmó el C. Jue. Miguel Mejia, Juez de Distrito de Hidalgo. Doy fé.—*M. Mejia.*—*F. Briseño.*

Es copia que certifico. Pachuca, Agosto 20 de 1874.—*F. Briseño*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Setiembre 22 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo por el C. Aristeo Perez á nombre de su padre Alejandro Perez, contra el C. Juez de 1ª instancia de Metztitlan, que lo redujo á prision, y luego lo puso en libertad bajo de fianza, violando en opinion del solicitante, la garantía consignada en los artículos 16 y 19 de la Constitucion. Visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Considerando: que aunque el artículo constitucional requiere ciertos requisitos para la validéz del auto de prision, que debe ser ante todo motivado, y aunque la Constitucion del Estado de Hidalgo preven ga que se funde en indicios vehementes, la calificacion de estos indicios es una atribucion natural de los jueces que tengan facultad para dictar dichos autos.

Que en el presente caso, el Juez responsable tenia indudable competencia para hacer esta calificacion, sin que entre en las facultades del Juez federal; la de calificar á su vez dichos indicios, que no sin razon juzgó suficientes el Juez de 1ª instancia para motivar el auto de prision, origen de este juicio.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia del C. Juez de Distrito que concedió el amparo al quejoso.

Devuélvanse estos autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José Maria Iglesias.*—*Miguel Anza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Maria Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Ocaña.*—*Ignacio Maria Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 21 de Octubre de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por la Sra. ex-religiosa Dª Josefa Lopez, contra el C. Tesorero general del Estado, por el embargo y remate de una finca.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice: que se ha impuesto con toda atencion del escrito de queja presentado por la Sra. ex-religiosa Dª Josefa Lopez, interponiendo el recurso de amparo en contra de la autoridad ejecutora del acto de embargo que reclama, solicitando á la vez la suspension del acto reclamado. Tambien se ha impuesto del informe rendido por el C. Cecilio Acosta, Tesorero del Estado, que es la autoridad en contra la que se ejerce el juicio de que nos ocupamos.

Apareciendo ser ciertos los hechos relacionados en el escrito de queja y relativos al embargo, punto objetivo que se debe tener presente para la suspension del acto reclamado ó no suspension; que los documentos exhibidos por la Sra. Lopez, son autén-

ticos como procedentes de oficinas públicas, y ellos justifican con evidencia la existencia de los hechos referidos por la quejosa, y que el caso de que se trata es urgente por su naturaleza, pues de no suspenderse los procedimientos, ellos causarán gravámen irreparable. El caso en cuestion, á juicio del que lleva la voz fiscal, está comprendido en las fracciones 1ª y 3ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución general; y con fundamento de lo expuesto y del artículo 6 de la ley orgánica citada, el que suscribe es de opinion se decreta la suspension que se solicita en el referido escrito de queja.

Aguascalientes, Julio 29 de 1874.—*Lic. J. Rondero.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, Julio 29 de 1874.—*Lic. J. Rondero.*

#### *Segundo pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que la Sra. ex-religiosa Dª Josefa Lopez, con fecha 27 de Julio próximo pasado presentó un ocurso al Juzgado de su digno cargo, solicitando amparo y proteccion de la Justicia de la Union, contra el acto que reclama ejecutado por el C. Tesorero del Estado D. Cecilio Acosta, quien trabó ejecución de embargo en una finca de la expresada Sra. Lopez, dando por causal estar pendientes de pago algunas contribuciones y el pago de alcabala sobre la suma de tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos cincuenta y ocho centavos, inclusa en esa alcabala la parte que corresponde á la contribucion federal. Con el escrito á que se hace relacion, se acompañaron tres documentos, marcados con los números 1, 2 y 3; los dos primeros expedidos por la Tesorería del Estado, y el tercero por la Jefatura de Hacienda federal. Se solicitó la suspension del acto reclamado, y el Juzgado, de confor-

midad con el parecer del que suscribe, el que obra á fojas 11 de estos autos, mandó suspenderlo por auto de 30 de Julio, segun consta á fojas 7 vuelta de los mismos, con fundamento de las disposiciones que en él se espresan, tan claras como terminantes.

La expresada Sra. refiere, como motivo de queja: que por sentencia judicial del Supremo Tribunal del Estado, se le reconocieron sus derechos á la dote que, como religiosa exclaustrada, tenía constituida en bienes de la testamentaria del Sr. D. Atanacio Rodriguez, como es público y notorio.

Que creyendo estar ya en quieta y pacifica posesion de dos fincas que constituyen su dote, en las que obtuvo el dominio y propiedad en Febrero último, se le han presentado dos boletas de cobro, las que obran originales en autos, la primera relativa á rezagos de contribuciones, y la segunda al pago de alcabala sobre la suma antes expresada de tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos cincuenta y ocho centavos, valor de las fincas ó de la adjudicacion que se le hizo como restitution de su dote, de conformidad con lo mandado en el artículo 15 de la ley federal de 12 de Julio de 1859.

El segundo de los documentos de cobro expresados, y de fecha 14, suscrito por el C. Tesorero general del Estado en forma de mandamiento, por el que se apremia á la Sra. mencionada al pago de la cantidad de trescientos treinta pesos veinticinco centavos, *sin expresar* la procedencia del adeudo, como consta del documento citado marcado con el número 2.

Despues entra el examen de los hechos referidos, cita algunas leyes federales que creo se han infringido con el acto reclamado, se queja de haberse violado en su persona la garantía que otorga la Constitución general, y concluye manifestando, que estando comprendido el caso reclamado en la 1ª y 3ª fraccion del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, con fundamento de ella y de los artículos 101 y 102 de la Suprema ley, pide á la Justicia de la Union

la amparo y proteja contra el acto del embargo reclamado.

Bien, el que lleva la voz fiscal, ha examinado los hechos relacionados de una manera detenida, ha estudiado los puntos de derecho y las disposiciones que deben tenerse presentes, según el punto que está á discusión para su aplicación; con toda conciencia ha fijado su atención en los dos informes rendidos por la autoridad ejecutora del acto reclamado, como en los justificantes que acompaña al segundo de los informes rendidos.

Comprobando todos los justificantes que obran en los presentes autos, ser cierto los hechos expuestos en el escrito de queja, con relación al cobro de la cantidad de trescientos diez pesos veinticinco centavos; la forma de hacerse y su causal, que es el cobro de rezagos de contribuciones pendientes, de derechos de alcabala que se le cobra á la Sra. ex-religiosa D<sup>a</sup> Josefa Lopez, sobre la suma de tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos cincuenta y ocho centavos, valor de la adjudicación de dos fincas que por restitución de su dote, adquirió y tomó posesión de ellas, sin haber percibido antes rédito alguno, como asegura y es de creerse así, supuesto que el capital que reconocía la testamentaria del Sr. Rodríguez, era de tres mil pesos, y que ascendió con renditos y costos á la de tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos cincuenta y ocho centavos, sin que llegue aun á la suma, importe de la dote, que es la de cuatro mil pesos.

En atención á que el mandamiento de embargo marcado con el número 2, no está en forma, ni tampoco el de la liquidación marcado con el número 1, lo que es contrario al precepto constitucional contenido en el artículo 16 de la Constitución general, y con cuya infracción se viola la garantía que él otorga.

De ser un hecho cierto que la Sra. Lopez tomó posesión de las fincas en Febrero, en virtud de no pagarle la testamentaria del Sr. Rodríguez el capital de tres mil pe-

sos que se le consignó en parte del pago de su dote, y que se le exije el pago de contribuciones causadas antes de ser ella dueña y propietaria de las fincas relacionadas.

El estar vigente la circular de Febrero de 1861, que exime del pago de contribuciones al censatario de capitales de monjas exclaustradas; cuya disposición federal, no puede dejar de observarse por ninguna autoridad, sin que cometa un acto de los comprendidos en la fracción 3<sup>a</sup> de la ley de 20 de Enero de 1869, orgánica de los juicios de amparo, de los artículos 101 y 102 de la Constitución general.

El que la Sra. Lopez adquirió las fincas, en virtud de que ellas le reconocían el capital de tres mil pesos, mas sus renditos, que le consignó la Hacienda pública federal con el título de restitución de su dote, que á las monjas exclaustradas les concedieron las leyes de Reforma de 12 de Julio de 1859, artículo 15. Y que por la de 13 de Julio de 1859, en el artículo 21, está prevenido, que ninguna operación de bienes nacionalizados causa alcabala, como manifestó el C. Gefe de Hacienda en la resolución que obra en los autos marcada con el número 3; es evidente que la no observancia de las disposiciones federales citadas, por la autoridad ejecutora del acto reclamado en cuestión, implica una infracción de las que comprende la fracción 3<sup>a</sup> del artículo 1<sup>o</sup> de la ley de 20 de Enero de 1869.

De ser una verdad que todos los agentes del fisco están autorizados por el decreto de 20 de Noviembre de 1838, á hacer uso de la facultad económico-coactiva para el cobro de sus adeudos líquidos y ciertos; pero no de los ilíquidos y dudosos, cuya decisión está encomendada por el mismo decreto, á los jueces de Hacienda respectivos, según sea el género de la deuda de que se trate, en cada caso en cuestión; y que la autoridad ejecutora del acto reclamado, de que nos ocupamos en los autos que se tienen á la vista, en los que se ha interpuesto el recurso de amparo, ha calificado hechos

que están fuera de su jurisdicción administrativa, con cuyo procedimiento se viola en la quejosa, la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitución general.

El Promotor que suscribe, con fundamento de lo expuesto y de los artículos 101 y 102 de nuestra Constitución citada, es de opinión: que la Justicia de la Unión ampare y proteja á la Sra. ex religiosa D<sup>a</sup> Josefa Lopez, contra el acto del embargo reclamado.

Aguascalientes, Agosto 6 de 1874.—*Lic. J. Rondero.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, Agosto 6 de 1874.—*Lic. J. Rondero.*

#### *Otro pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez Federal de Distrito.

El Cefe de Hacienda que suscribe, en ejercicio de la Promotoria fiscal, dice: que se ha impuesto de los seis documentos, que como justificantes, adjunta el C. Tesorero general del Estado á su informe de fecha 3 del que cursa.

Por el primero de esos documentos se observa, que el valor en que se hizo la adjudicación de bienes dotales á la Sra. Lopez, fué el de tres mil doscientos veintiseis pesos setenta y cuatro centavos; de manera que aun en el supuesto de que hubiera mérito para cobrarse alcabala, serviría de base para el cobro, esa suma, y no la mayor de tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos cincuenta y cho centavos que se está reclamando. Importa por lo tanto esta diferencia, una duda que reduce la cuenta al carácter de líquida que ya se le ha dado. Esto es lo único que se desprende de ese documento.

El número 2 prueba que hizo un entero el C. Lic. Secretario de Gobierno, de doscientos cuarenta pesos noventa y siete centavos, á la Administración de rentas del Estado, por cuyo hecho quedaba la Sra. Lopez exonerada de todo cargo que se le

dirijiera, relativamente á ese entero que es el de la alcabala en cuestión. Digo esto, fundándome en que no se puede expedir un recibo de pago, sin que ingrese el valor que lo motiva, tanto mas, cuanto que ese recibo no tiene siquiera la calidad de provisional, sino la de legítimo pago. La forma en que se hizo, arguye no contra la Sra. Lopez sino contra el representante; pues aunque se dice que se le daba el certificado á condición de que aceptase una letra, no está justificada esa obligación; que en último caso no consta haya autorizado la interesada, á quien directa ó indirectamente correspondía aceptar ó autorizar aquella.

Ademas, se ha hecho constar, que esa certificación fué enviada al Juez de Letras, por lo que á menos obliga ya el cobro á la Sra. Lopez, quedando así expedita para recibir libre de la alcabala, los bienes que ha recibido.

Se vé pues, que incurre en una contradicción el C. Tesorero, al suponer que del certificado de pago, nace una obligación contra la Sra. Lopez, cuando por el contrario, falta esa obligación, y únicamente subsiste ó aparece subsistente aquel certificado. Manifestaré de paso, que aun cuando conste en un documento la fecha y sello de la oficina, mientras no contenga la firma de la persona que lo suscribe, no puede surtir efecto alguno. Hago mérito de circunstancia tan vulgar y conocida, porque de ello se pretende inferir que la cuenta reclamada á la Sra. Lopez, está líquida.

A mi juicio, es una esencia ilíquida la operación.

En primer lugar, la base de tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos cincuenta y ocho centavos, tomada para el cobro de contribuciones y alcabala, no es la que debiera haberse fijado, pues conforme á la acta de remate, extendida el 17 de Noviembre último, el precio es por cantidad de tres mil doscientos veintiseis pesos setenta y cuatro centavos, como el mismo C. Tesorero lo demuestra en la copia que de esa acta acom-

pañía á su informe. Esta cantidad, menos que la anterior, daría un resultado al cinco por ciento (derecho de traslación), de doscientos un pesos sesenta y seis centavos, incluso la Federal; luego no son doscientos cuarenta pesos noventa y seis centavos de alcabala, sino doscientos un pesos sesenta y seis centavos los que fueran de cobrarse.

Yo no sé si antes de que obtuviera la Sra. Lopez la posesion de las fincas, se cobraban impuestos á esas fincas por tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos cincuenta y ocho centavos; pero el hecho es, que al obtenerlas, fué en precio de tres mil doscientos veintiseis pesos setenta y cuatro centavos; luego por esta cantidad procedería el cobro, y no por otra mayor cuyo origen se desconoce.

En segundo lugar, ya se ha dicho y hay que repetirlo, que á la Señora no fueron entregadas aquellas fincas, sino hasta el mes de Febrero del presente año, ó lo que es igual, cuatro meses despues del en que se hizo el remate en favor de la Sra. Lopez, por el Juez de 1ª instancia; en cuya virtud, desde Febrero citado parte la liquidacion y no del tercer tercio de 72, en que la testamentaría de D. Atanacio Rodríguez tenía en su poder las fincas de que se trata. Por la misma razon no corresponde á la referida Señora, el pago de contribuciones del año de 73, que asciende, segun el apunte respectivo, á sesenta pesos veintidos centavos, cuando á lo sumo tendria que satisfacer parte del primer tercio del año actual, y el segundo que corre, por una cantidad que llegara á diez y seis pesos, y todo en el supuesto de que á la Sra. correspondía pagar tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesos cincuenta y ocho centavos que no valen sus fincas, por no ser ese su justo precio, sino el de tres mil doscientos veintiseis pesos setenta y cuatro centavos en que se constituyó el remate.

Luego tambien aparece por tales hechos, que la *cuenta está ilíquida* y que ha tenido la quejosa causa legal y fundada para opo-

nerse á cubrir lo que se le reclama.

He aquí lo que prueba el documento número 2.

El número 3, es una rescia de los actos ejecutados por el C. Tesorero, vista la imposibilidad de pago en que estaba la Señora y las diferencias de cobro observadas, así como de su ninguna responsabilidad en que la ley de 13 de Julio de 1859, la haya dispensado de pagar alcabala, causas todas suficientes para que no hubiese tenido efecto el embargo, de cuyo procedimiento se queja precisamente la Sra. Lopez, al solicitar el amparo, y estraña no obstante el C. Tesorero, que *nada dijese* la solicitante á este respecto.

En el documento número 4, dá por bien sentado la autoridad ejecutora, que la ley económico-coactiva, aplicable solo á determinados casos en los que los aduados fiscales son claros y reconocen un origen legítimo, lo faculta para hacer uso de ella en cualesquier caso; sin tener presente ante todo, que esa ley no puede ser la coraza de hierro en que se estrellen los efectos de las leyes generales, como lo es la de 12 y 13 de Julio de 1859 elevada al rango de preceptos constitucionales.

Y si en la órbita de las facultades de esa autoridad no cabe, ni puede estar, oponerse á las reglas prescritas por la Constitucion de la República, claro es que al ejecutar un acto contrario á ellas por medio de la ley económico-coactiva, se ha invadido la esfera federal, y hubo sobrada razon para que en el pedimento que obra á fojas.....de estos autos, se considerase comprendido el amparo que se promueve, en la fraccion 3ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Luego por otra parte, la ley económico-coactiva y las demas que cita el C. Tesorero, no han podido obligar á la Sra. Lopez á sujetarse al texto de ellas, que viola en su persona la garantía individual otorgada en el artículo 16 de la misma Constitucion federal, atenta la escopcion legal que se ha mencionado.

Prueba, por lo tanto, es el documento número 4, de que existe sustancialmente lo causa para que se pida y se decreta el amparo, sobre cuyo punto se ha pasado por alto la justificación necesaria de que para nada se ocupa en su informe la autoridad ejecutora del acto que se reclama.

El documento número 5, tampoco produce prueba alguna contra la Sra. Lopez, por no constar que conviniera, obligándose bajo su firma, en las estipulaciones de aceptación de libranza, á que alude el C. Lic. Perez Maldonado, lo que si constara debidamente, serviría de prueba, y no en su lugar, el aserto de dicho ciudadano que no cubre la falta de esa obligación.

Igual inteligencia puede darse al documento número 6, por el que tambien se asevera que el C. Lic. Macedonio Lopez fué á hacer proposiciones, que si admitió ó no el C. Tesorero, se ignora por una parte y por otra algun resultado debieron haber producido que confirmase la verdad de un recado ó mandatos semejantes.

En cuanto al punto capital de esta cuestion, como procede de la no observancia de una ley federal y de la aplicacion que deba dársele, creo que en último análisis sería ello motivo de una controversia que no puede resolver el funcionario de un Estado sino el Juez competente, que es el de Distrito; y tanto por esta circunstancia, como por la de que los documentos que agrega á su informe la autoridad ejecutora, no justifican la legalidad del acto que se reclama, opina el que suscribe, que ha lugar á concederse el amparo que de la Justicia de la Union impetra la Sra. religiosa ex-claustrada Doña María Josefa Lopez.

Así es de esperarse del ilustrado y recto juicio de V. C. Juez.

Aguascalientes, Agosto 25 de 1874.—  
*I. Ocadiz.*

Es copia que certifico. Aguascalientes,  
Agosto 25 de 1874.—*D. Oritgosa.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Aguascalientes, Agosto 28 de 1874.—  
Visto este juicio de amparo promovido por la Sra. Doña Josefa Lopez, monja exclaustrada del ex-convento de la Enseñanza de esta Ciudad, contra el C. Tesorero general del Estado, el que en uso de las facultades económico-coactivas, le mandó embargar una tienda, trastienda, un canal y una huerta, pertenecientes á la finca que se le adjudicó por el Juzgado 1º de 1ª instancia, en 7 de Noviembre de 1872, para cubrir el importe de su dote, réditos y costas, por no haber satisfecho la alcabala y el rezago de las contribuciones que causó la finca antes que le fuese adjudicada, y que trata de rematar, con cuyos procedimientos creo la quejosa se han vulnerado las garantías que le otorga el artículo 16 de la Constitución federal, no solamente porque el crédito es ilíquido, sino tambien porque se exige en contravencion del decreto de 26 de Febrero de 1861, artículo 15 de la ley de 12 de Julio de 1859 y 21 de la de 13 del mismo mes y año, que exceptuó del pago de alcabala y contribuciones, á toda operacion que se practicara en bienes desamortizados y dotales de monjas. Vistos los informes de la autoridad ejecutora y sus justificantes; el decreto en que se mandó suspender el acto reclamado; los pedimentos y alegato de la parte fiscal; la citacion para sentencia y cuanto mas consta de autos.

Considerando: que si bien la autoridad ejecutora basa el cobro que hace á la quejosa, en el hecho de haberse obligado á su pago, espontaneamente, el apoderado de esta, Lic. D. Pedro P. Maldonado, y en la opinion que se ha formado de que la enagenacion y remate verificado en favor de la citada monja exclaustrada, no debe considerarse como acto ejercido en virtud de las leyes de desamortizacion, sino libre y ageno de estas y con el fin de adquirir el dominio, por cuya traslacion se han causado los derechos de alcabala en favor del Estado, y



las contribuciones, que segun su juicio, no afectan á las personas, sino únicamente á las propiedades que estos tienen.

Que habiendo consultado al Gobierno del Estado sobre esa opinion, la resolusion de esta autoridad, segun la constancia que adjuntó á su informe, es así mismo en igual sentido, asegurando: que el caso de remate y adjudicacion á que se alude, no debe creerse comprendido en las leyes citadas, y que por lo tanto son exigibles aquellos adeudos por el Estado en favor de quien se causan. Como tales conceptos pugnan abiertamente con el espíritu manifesto de dichas leyes citadas por la quejosa, supuesto que al declarar el artículo 15 de la ley de 20 de Julio de 1869, la propiedad exclusiva á las religiosas exclaustradas de las dotes que ingresaban al convento, habló de su totalidad é integridad, sea cual fuere el acto por el que quedaran reintegradas.

Que de acuerdo con esta prevencion, se halla redactado el artículo 21 de la ley de 13 de Julio del mismo año, que declaró libres del pago de alcabala, á toda enagenacion, subrogacion ó remate que se hiciera en bienes de desamortizacion, en los que estaban comprendidos para todos sus beneficios, no solamente los que debian desamortizarse, sino tambien los que quedaban exceptuados para reintegrarse por el mismo Gobierno; y es bien perceptible, que en el caso de que se hiciera exigente un remate para revindicar y hacer efectivo el aprovechamiento de los bienes cedidos por el mismo Gobierno, quedarían incompletos, si el pago de alcabalas y contribuciones rezagadas, rebajaban el valor total que por la misma ley debieron percibir. Esto concepto lo establece de una manera que no deja duda, el decreto de 26 de Febrero de 1861, que determinó: que las personas que reconocieran capitales en favor de las Sras. religiosas, no pagaran impuestos ni contribucion alguna por dichos capitales, por deberse destinar los réditos respectivos á los alimentos de las expresadas Señoras. De esto se

deduce: que no puede haber rezagos que cobrar del censatario, por los capitales que reconocía á la monja expresada, ni obligacion de esta para cubrir su importe, ni de la alcabala, supuesto que es una contribucion comprendida en las mismas palabras del mencionado decreto.

Considerando: que si por las leyes de desamortizacion, los Estados quedaron excluidos del derecho de percibir el importe de las alcabalas de bienes eclesiásticos, adjudicados, subrogados, rematados ó enagenados por cualquiera otra operacion oficial, por estar reservado su producto al Gobierno federal, las dudas que se suscitaban sobre si tal ó cual operacion está comprendida en los preceptos de dichas leyes, no podian ser de la competencia de las autoridades de dichos Estados, por versarse el interés de la Federacion obligada al saneamiento de los que designó para cubrir una propiedad reconocida por la misma ley, y legítimamente adquirida de antemano, cual es el de dotes de monjas. Y se nota muy bien, que al designar dicho Gobierno á la ex-religiosa Doña Josefa Lopez, por una operacion oficial, el capital de tres mil pesos y sus réditos que gravitaban sobre las fincas de la testamentaria del finado Sr. D. Atanasio Rodriguez, al mandar se le entregaran las escrituras de su reconocimiento á fin de acreditar el derecho que asistía á dicha monja para percibir ese capital y sus productos; era claro que no pudiendo por si misma obligar al cesionario en caso de resistencia ó imposibilidad á hacer el pago, la ejecucion ó remate que á su instancia se verificara, debia estimarse como un efecto complementario de aquella designacion ó operacion oficial, y que por lo mismo, si tal concepto envolviese alguna duda, la autoridad competente para definirla, era indudablemente la federal, interesada en su resolucion.

Considerando por último: que por estos motivos, la resistencia que opone la citada ex-religiosa para reconocerse obligada por

los convenios de su apoderado á satisfacer la alcabala y rezagos de contribuciones que se le exigen, y á no aceptar y firmar la libranza con que se sustituyó la expedición del certificado de pago que dió la oficina, tiene por fundamento la falta de causa de deberse, según su juicio, y la falta también de liquidación del adeudo en el supuesto de que se declara legal; y como una y otra resolución están fuera de la competencia del C. Tesorero, no hay duda en que al embargar y sacar á remate los bienes que se expresan al principio, viola las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución general.

Por tales fundamentos, y los expresados por la parte fiscal, el Juez que suscribe, de conformidad con lo prevenido en los artículos 101, 102 y 126 de la Constitución federal y ley de 20 de Enero de 1869, declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á la Sra. ex-religiosa Doña Josefa Lopez, en la garantía que le otorga el artículo 16 constitucional, contra los procedimientos del C. Tesorero general del Estado que motivaron este recurso.

Notifíquese esta sentencia; publíquese por los periódicos y remítase con el expediente á la Suprema Corte de Justicia para los efectos que correspondan.

El C. Lic. Isidro Arteaga, Juez de Distrito del Estado, así lo declaró y firmó: doy fé.—*Isidro Arteaga*.—*Silverio Arteaga*, secretario.

Es copia que certifico. Aguascalientes, 29 de Agosto de 1874.—*Silverio Arteaga*, secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Setiembre 25 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por D<sup>a</sup> Josefa Lopez, ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, contra el Tesorero general de aquel Estado, que en uso de la facultad

TOMO VI.—PARTE II.

económico coactiva, le mandó embargar una tienda, trastienda, un corral y una huerta pertenecientes á la finca adjudicada á la solicitante por la autoridad judicial, para cubrir el importe de su dote, réditos y costas, embargo motivado por la falta de pago de alcabalas y recargo de contribuciones que adeudaba la finca antes de ser adjudicada, con lo cual en concepto de la quejosa, se viola el artículo 16 de la Carta federal; visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo á D<sup>a</sup> Josefa Lopez.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el T<sup>o</sup>ca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Miguel Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozano*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramírez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*Simón Guzmán*.—*M. Zavala*.—*José García Ramírez*.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 12 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.